

por otra concebida en términos más amplios, y el Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4) formuló una propuesta análoga, pero que va aún más lejos en el mismo sentido.

101. La definición plantea sobre todo problemas de terminología. En algunos países, el vocablo «archivos» significa exclusivamente ficheros de cuestiones ya resueltas. Mientras no se resuelva una cuestión, los documentos pertinentes siguen considerándose como «correspondencia».

102. En la Convención de Viena no se incluye ninguna definición de los archivos diplomáticos, aunque tal vez esa definición no fuese necesaria dado el carácter de los locales de la misión diplomática, la residencia del agente diplomático y la misma persona del agente diplomático. Los archivos consulares gozan de una inviolabilidad concreta, y por lo tanto es importante definir el término. Además, la definición de «archivos consulares» debe ser todo lo amplia que sea posible, a fin de ofrecer al Estado que envía toda clase de garantías en relación con la correspondencia, documentos, libros y material de cifra de su consulado.

103. Por último, desea referirse al problema especial que plantean los fondos pertenecientes al Estado que envía y que están en poder del consulado como ha sugerido el gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/136/Add.4) pero será difícil incluirlos en la expresión «archivos consulares». Sin embargo, no cabe duda de que, por tratarse de fondos pertenecientes a un Estado extranjero, son inviolables en el Estado de residencia, dondequiera que se encuentren, y por lo tanto conveniría añadir una cláusula expresa en tal sentido, ya sea en el artículo sobre la inviolabilidad de los locales o en un artículo independiente.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

## 614.<sup>a</sup> SESIÓN

*Martes 20 de junio de 1961, a las 10 horas*

*Presidente:* Sr. Grigory I. TUNKIN

### **Relaciones e inmunidades consulares** (A/4425; A/CN.4/136 y Add.1 a 11, A/CN.4/137) (continuación)

[Tema 2 del programa]

#### **PROYECTO DE ARTÍCULOS (A/4425) (continuación)**

##### **ARTÍCULO 1 (Definiciones) (continuación)**

##### *Apartado 1): archivos consulares (continuación)*

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el examen del nuevo texto del artículo 1 (613.<sup>a</sup> sesión, párr. 8) del proyecto sobre relaciones

e inmunidades consulares (A/4425) preparado por el Comité de Redacción.

2. El Sr. YASSEEN dice que en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (A/CONF. 20/13) no se incluye ninguna definición de los archivos diplomáticos. Desde luego, esto no es una razón para excluir del proyecto sobre relaciones consulares una definición sobre los archivos consulares, si dicha definición se estima necesaria. Sin embargo, en el artículo 1 deberán definirse exclusivamente aquellos términos que se repiten frecuentemente en el proyecto. En cuanto a los archivos consulares, que se mencionan en los artículos 33 y 55, será mejor seguir el ejemplo de la Convención de Viena que define la expresión «correspondencia oficial» no en el artículo 1, sino en el artículo 27, relativo a la libre comunicación.

3. Por consiguiente, propone que si la Comisión decide aprobar la proyectada definición de «archivos consulares», lo mejor será incluirla en el artículo 33, que trata de la inviolabilidad de dichos archivos. Respecto al artículo 55, no es más que la adaptación del artículo 33 a los cónsules honorarios, y la expresión que en él se emplea de «archivos consulares» debe interpretarse teniendo presente el artículo 33.

4. El Sr. PAL señala que el artículo 33 hace mención de «los documentos y de la correspondencia oficial del consulado» como de algo distinto de los archivos consulares. Por consiguiente, si se propone que la definición de «archivos consulares» abarque asimismo los documentos y la correspondencia, será necesario modificar los términos del artículo 33.

5. El Sr. AGO manifiesta que la correspondencia aludida en el término «archivos» es la relativa a cuestiones que han sido resueltas. Por lo tanto, en el proyecto deberá enunciarse separadamente la inviolabilidad de la correspondencia oficial del consulado sobre asuntos pendientes.

6. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, coincide con el criterio general del Sr. Yasseen en la cuestión de las definiciones, aunque en el caso concreto de los archivos consulares hay buenas razones que aconsejan dejar la definición en el artículo 1. En primer lugar, existe una razón de índole práctica y es que las personas que lean el proyecto normalmente consultarán el artículo 1 para enterarse de las definiciones que se emplean en todo el texto. En segundo lugar, la expresión «archivos consulares» se emplea en los artículos 33 y 55, y este último es independiente del primero, puesto que es algo más que una referencia al artículo 33.

7. El Sr. ERIM dice que es satisfactoria la definición propuesta de los archivos consulares. Sin embargo, coincide con el Sr. Pal en que es preciso eliminar todas las inconsecuencias entre esa definición y los términos del artículo 33. Lo mismo puede decirse respecto del artículo 55, que también se refiere a los archivos consulares, a los documentos y a la correspondencia oficial del consulado.

8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la Comisión, manifiesta que es necesaria una definición de los archivos consulares en el artículo 1.

9. Refiriéndose a la cuestión planteada por el Sr. Pal, propone que el Comité de Redacción revise los artículos 33, 36 y 55, a fin de eliminar toda posible consecuencia. El artículo 36, relativo a la libertad de comunicación, comprenderá la inviolabilidad de la correspondencia consular como medio de comunicación.

10. Hablando como Presidente, manifiesta que, de no haber ninguna objeción, procede que la Comisión apruebe dicha propuesta.

*Así queda acordado.*

*Apartado m) : nacionales, y apartado n) : buque*

11. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que se prepararon las definiciones de los términos «nacionales» y «buque» para atender a las observaciones de los gobiernos.

12. El Sr. ERIM dice que estas dos definiciones son innecesarias en el proyecto de artículos. El artículo 1 debe contener exclusivamente los términos empleados en la terminología de las relaciones consulares. La Comisión deberá abstenerse de definir conceptos jurídicos generales, que se definen en otros lugares y no en los instrumentos relativos a las relaciones consulares.

13. El significado del término «nacional» deberá determinarse por las reglas generales de derecho internacional, y el de «buque» por las normas del derecho marítimo mercantil.

14. Ciertamente que en el proyecto se empleen muchos términos jurídicos generales, pero ello no justifica que se los defina en el artículo 1. Recuerda que la Comisión tuvo que renunciar al intento de definir el significado de «miembro de la familia», aunque tal definición hubiera sido útil (613.<sup>a</sup> sesión, párr. 93).

15. El Sr. AGO conviene con el Sr. Erim en que el artículo 1 no debe contener definiciones de los conceptos jurídicos generales, y dice que si en el artículo 1 no se incluyen las definiciones de «nacionales» y «buque» será indispensable exponer claramente en los artículos apropiados, en primer lugar, que el término «nacionales» se refiere asimismo a las personas jurídicas, y en segundo lugar, que el término «buque» se refiere no sólo a los buques destinados a la navegación marítima sino también a las embarcaciones de la navegación fluvial.

16. Hay un inconveniente de orden práctico y es que el texto de los artículos con tales modificaciones sería indebidamente ampuloso. Corresponde a la Comisión decidir si desea que el Comité de Redacción proceda de dicha forma o si ha de conservar esas definiciones en el artículo 1. Lo que la Comisión no puede ni debe hacer es dejar sin resolver las dos cuestiones aludidas; a falta de una declaración explícita, persistirían las dudas acerca de estos dos puntos y surgirían graves dificultades de interpretación.

17. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que no ve ningún inconveniente en que se incluya el apartado m). Su finalidad no consiste en establecer un criterio para determinar quién es nacional del Estado que envía o qué personas jurídicas se considera que tienen la nacionalidad de dicho Estado. Tiene por objeto meramente aclarar que las personas jurídicas tienen derecho a la

misma protección que los individuos si tienen la nacionalidad del Estado que envía, a condición, naturalmente, de que el artículo sea aplicable también a las personas jurídicas. Es absolutamente indispensable una declaración en tal sentido, como ya lo indicó en su tercer informe (A/CN.4/137, comentario al artículo 4), ya que en los debates de la Sexta Comisión al menos una delegación, la de Indonesia, sugirió que el vocablo «nacionales» debe aplicarse a las personas físicas exclusivamente y no a las jurídicas.

18. Por último, desde el punto de vista práctico, es más sencillo resolver esta cuestión en el artículo dedicado a las definiciones que modificar los proyectos de todos los artículos pertinentes. Normalmente se consultará el artículo 1 para lo relativo a la interpretación de los términos que aparecen en el proyecto.

19. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que pueden aducirse muchos argumentos en favor de la opinión expresada por el Sr. Erim. En la Conferencia de Viena un representante preguntó si el término «nacional», tal y como se empleaba en el proyecto sobre relaciones diplomáticas, comprendía asimismo a las asociaciones o personas jurídicas; se respondió a esta pregunta satisfactoriamente, pero no obstante no se incluyó ninguna disposición a este respecto en la Convención de Viena.

20. Sería sin duda un tanto extraño que en el artículo 1 se incluyeran las definiciones de los términos «nacionales» y «buques», que se refieren a cuestiones pertinentes a las relaciones consulares. Está completamente de acuerdo con el Sr. Ago en que de las dos posibilidades que se ofrecen a la Comisión es preferible la de sacar las definiciones del artículo 1 y cambiar la redacción de los artículos pertinentes.

21. El apartado n) encierra una cuestión más compleja. Sus disposiciones no coinciden con los términos del artículo 5 de la Convención sobre la Alta Mar, de 1958 (A/CONF.13/L.53). Según dicho artículo 5, la inscripción de un buque en el registro del territorio de un Estado es una condición previa para que dicho buque tenga el derecho de enarbolarse su bandera. Sería enteramente anormal el que un buque enarbolara el pabellón de un país y figurara inscrito en el registro de otro; esa situación no se previó en la Convención sobre la Alta Mar. El párrafo 1 del artículo 6 de la citada Convención dice que los buques estarán sometidos, en alta mar, a la jurisdicción exclusiva del Estado cuya bandera enarbolan.

22. En vista de esas disposiciones de la Convención sobre la Alta Mar los términos disyuntivos del párrafo n) darían lugar a complicaciones.

23. El PRESIDENTE manifiesta que sería útil que el Relator Especial informara sobre el número de artículos en los que se emplea el término «nacionales» refiriéndose a las personas físicas y a las jurídicas. Asimismo, sobre los artículos en que se hace referencia a «buques».

24. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, dice que la referencia a buques figura en el artículo 4 y en el apartado c) del artículo 5. Refiriéndose a la declaración del Secretario de la Comisión, explica que en algunos países

las embarcaciones pequeñas, los pequeños barcos de pesca, por ejemplo, no tienen derecho a enarbolar el pabellón nacional, y que la prueba de su nacionalidad es el registro.

25. A los efectos del apartado c) del artículo 5, tiene especial utilidad una definición general del término «buque». El Estado que envía tiene interés en que se le informe, a través de sus consulados, de cualquier percance ocurrido a uno de sus buques, ya sea de navegación marítima o fluvial, e independientemente de si el buque tiene un tonelaje que le permita enarbolar su bandera.

26. En varias convenciones bilaterales se define el término «buque», como por ejemplo, en la Convención anglosueca de 1952, cuyo artículo 2 dispone que el término «nacionales» comprende, siempre que lo permita el contexto, «a todas las entidades jurídicas debidamente constituidas de conformidad con la ley» de uno de los Estados interesados<sup>1</sup>.

27. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que bastará con decir sencillamente, en los lugares apropiados del proyecto, que el término «nacionales» comprende asimismo a las personas jurídicas, y que en el término «buques» se incluyen las embarcaciones destinadas a la navegación fluvial.

28. Será mejor que la Comisión no intente la tarea más delicada de determinar en qué circunstancias una persona es nacional del Estado que envía, o un buque pertenece a dicho Estado. Todo intento de abordar esta cuestión plantearía, en relación con los buques, el enojoso y controvertible problema de las banderas de conveniencia. Para los fines del presente proyecto, no es necesario referirse a los requisitos indispensables para que un buque pueda ser considerado como perteneciente a un Estado determinado. Además, si la Comisión desea abordar esta cuestión, tendrá que examinarla a fondo.

29. Las referencias a los buques figuran en el apartado c) del artículo 5 y en el artículo 4 del proyecto. Propone que en todos estos textos se haga una referencia a «buques del Estado que envía»; de esa forma, la Comisión no tendría necesidad de abordar las difíciles cuestiones jurídicas relativas al registro y al derecho de enarbolar el pabellón de un Estado.

30. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la Comisión, propone que el Comité de Redacción decida en qué lugar procede incluir la declaración de que el término «nacionales» se refiere asimismo a las personas jurídicas, ya sea en el artículo 1, o en los diversos artículos en los que dicho término se refiere a otras personas además de las físicas.

31. En cuanto al apartado n) dice que sus disposiciones no coinciden con las del artículo 5 de la Convención sobre la Alta Mar. Está de acuerdo con los miembros que han indicado que la Comisión no debe abordar el problema jurídico de la determinación de la nacionalidad

de los buques. A los efectos del proyecto sobre relaciones consulares, basta con una referencia a los buques «que tengan la nacionalidad del Estado que envía». Recuerda que el procedimiento para determinar la nacionalidad de un buque originó dificultades considerables en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y asimismo en diversas conferencias internacionales del trabajo; es más prudente, por tanto, que la Comisión no examine los requisitos que ha de reunir un buque para enarbolar la bandera de un Estado.

32. El Sr. YASSEEN se pregunta si verdaderamente puede hablarse de nacionalidad cuando se trata de personas jurídicas. Según numerosos autores, la analogía en este aspecto entre una persona física y una persona jurídica es más aparente que real.

33. En todo caso, la única finalidad que se persiguió al incluir la definición de «nacionales» fue aclarar que ciertas reglas establecidas en el proyecto de artículos se aplican no sólo a las personas físicas sino también a las jurídicas. Sin embargo, esa declaración está concebida en términos excesivamente amplios y categóricos en el proyectado apartado m). Es evidente que la definición que figura en dicho apartado no puede aplicarse a todos los artículos en los que se emplea el término «nacionales». Por ejemplo, en la referencia a «nacionales» del apartado b) del artículo 6 y en el apartado c) del artículo 6 relativo a las personas detenidas o encarceladas, y en el artículo 11, que trata del nombramiento de nacionales del Estado de residencia, en los que es claro que el término se refiere exclusivamente a las personas físicas. A su juicio, las únicas disposiciones que son aplicables tanto a las personas físicas como a las jurídicas son las del artículo 4, relativo a la protección de los nacionales y, con ciertas reservas, las disposiciones del apartado a) del artículo 6 que tratan de la comunicación con el consul.

34. En vista de las circunstancias expuestas, lo que procede es incluir en los lugares pertinentes del artículo 4 y del apartado a) del artículo 6 una referencia a las personas jurídicas, inmediatamente después del vocablo «nacionales».

35. El Sr. VERDROSS conviene en que el asunto que se está debatiendo se refiere exclusivamente a la protección de las personas jurídicas. Sin embargo, en vista de que existe una abundante literatura jurídica sobre este tema, la Comisión debe abordar este problema. Puede declarar claramente en algún lugar del proyecto de artículos que si un Estado otorga su nacionalidad a una persona jurídica tiene derecho a extender a la misma la protección consular.

36. El Sr. ERIM manifiesta que el debate ha confirmado su opinión de que es preferible suprimir los apartados m) y n). No hay motivo alguno para que los términos «nacionales» y «buque» se definan en el artículo 1, del mismo modo que el gran número de conceptos jurídicos de carácter general que se emplean en el proyecto, tales como «Estado» o «derecho interno». Además, cualquier referencia a la nacionalidad de las personas físicas o jurídicas o a la de los buques plantearía problemas en vez de resolverlos. Una referencia de esta naturaleza evocaría problemas como el de la

<sup>1</sup> *Lois et règlements concernant les privilèges et les immunités diplomatiques et consulaires, Série législative des Nations Unies, Vol. VII* (publicación de las Naciones Unidas, N.º de venta: 58.V.3), pág. 468.

doble nacionalidad, que la Comisión no se propone resolver.

37. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA manifiesta que coincide con el Sr. Ago en que cabe suprimir la definición de «nacionales» en el artículo 1 e incluir en el artículo 4 la aclaración de que el término se refiere tanto a las personas físicas como a las jurídicas. La Comisión no tiene por qué decidir inmediatamente si las personas jurídicas tienen una nacionalidad y, en caso afirmativo, qué nacionalidad. Es menester modificar la definición de «buque», pues discrepa de las disposiciones de la Convención sobre la Alta Mar. La Comisión deberá poner especial cuidado en no proponer definiciones que pugnen con las definiciones establecidas previamente por ella y aceptadas por una conferencia de plenipotenciarios. Es cierto que el artículo 5 de la Convención sobre la Alta Mar se refiere al pabellón que un buque tiene derecho a enarbolar, mientras que la definición del proyecto de artículo 1, que se está examinado, alude a la bandera que efectivamente enarbole el buque. La definición propuesta por el Comité de Redacción también omite el concepto de la «relación auténtica» que se menciona en la Convención sobre la Alta Mar. Por consiguiente, la frase podría ser la siguiente: «que tenga la nacionalidad del Estado de que se trate».

38. El Sr. AGO hace observar que casi todos los miembros coinciden en que procede suprimir el segundo de los dos elementos de la definición de «buque» y pedir al Comité de Redacción que estudie las modificaciones pertinentes en el proyecto de artículos. La definición de «nacionales» se requiere en los artículos 4 y 6 exclusivamente. No incumbe a la Comisión estudiar los modos para determinar la nacionalidad de los buques, o por consecuencia, las cuestiones referentes a la «relación auténtica» y al registro.

39. El Sr. FRANÇOIS está de acuerdo con el Sr. Ago. Según parece, el Sr. Erim no tuvo en cuenta el hecho de que la Comisión no está redactando una convención sobre la nacionalidad, sino un instrumento en el que se definen las funciones de los cónsules. Es evidente que los cónsules de un Estado pueden proteger a las personas jurídicas que la legislación de ese Estado considere nacionales suyas. Para aclarar este punto, bastará con decir en el proyecto que el cónsul tiene la competencia necesaria. Lo mismo puede decirse respecto de los buques. Si en la definición se menciona el pabellón y el registro, se plantea entonces el problema de determinar la nacionalidad del buque que enarbole el pabellón de un Estado y esté inscrito en el registro de otro. Si se decide conservar la definición de «buque», será preciso ampliarla a fin de incluir asimismo a los buques que, según la legislación del Estado que envía, tengan su nacionalidad.

40. El Sr. ŽOUREK, Relator Especial, explica que la definición de «buque» del apartado n) es una versión abreviada de una definición previa preparada por él para el Comité de Redacción, en la que el término «buque» de un Estado se definió así: «excepto los buques de guerra, toda nave o embarcación destinada a la navegación marítima o fluvial y que enarbole la bandera del Estado de que se trate o (si se trata de embarcaciones

que no tengan derecho a enarbolar la bandera nacional) que esté matriculada en el Estado de que se trate». La cláusula relativa al registro se incluyó meramente con carácter suplementario. Pero, sea cual fuere la decisión de la Comisión, es menester declarar en algún lugar del proyecto que el término «buque» se refiere a cualquier embarcación que se utilice para la navegación marítima o fluvial, puesto que así lo han pedido varios gobiernos.

41. El PRESIDENTE dice que prevalece la opinión de que se suprima el apartado m) y se pida al Comité de Redacción que incluya una referencia a las personas jurídicas en los artículos cuyo propósito sea no solamente referirse a las personas sino también a las jurídicas. En cuanto al apartado n), puede resultar enojoso repetir, en cada artículo pertinente, que por buque se entiende toda embarcación utilizada para la navegación marítima o fluvial; para evitar esa desmañada redacción, quizá esté justificado que se conserve la definición en el proyecto de artículo 1. El Comité de Redacción es el llamado a decidir a este respecto, pero en todo caso procede suprimir la última frase y reemplazarla por la siguiente: «que tenga la nacionalidad del Estado que envía», o por esta otra: «que tenga la nacionalidad del Estado de que se trate».

*Así queda acordado.*

42. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha terminado su examen preliminar del proyecto de artículo 1 (Definiciones).

#### **Preparación del plan de trabajo de la Comisión (A/CN.4/138)**

*(reanudación del debate de la 597.ª sesión)*

[Tema 6 del programa]

43. El PRESIDENTE dice que, en virtud de la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, se incluyó en el programa provisional del decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea, el tema «labor futura en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional». No se pidió a la Comisión que tomara decisión alguna con respecto a esa resolución, pero tal vez los miembros quieran aprovechar la oportunidad para manifestar sus opiniones dándolas a conocer a la Sexta Comisión de la Asamblea.

44. El Sr. VERDROSS dice que el futuro trabajo de la Comisión debe regirse por cuatro principios generales. El primero es que la Comisión sólo debe codificar leyes sobre temas de importancia universal; el segundo, es que no debe codificar leyes sobre temas extremadamente controvertibles; el tercero es que la codificación esté ya en proceso de formación —como la reflejarán las prácticas generalmente establecidas—, puesto que la Comisión no es competente para elaborar un derecho internacional absolutamente nuevo; y el cuarto es que el trabajo de la Comisión no debe sobreponerse al de otros órganos internacionales competentes como, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos. El programa de trabajo de la Comisión incluye tres temas muy importantes que satisfacen esos principios: el derecho de los tratados, el derecho general

de la responsabilidad del Estado, y el tema más particular de la responsabilidad del Estado por daños causados a extranjeros. Sin embargo, cabe hacer nuevas sugerencias. Un tema de importancia fundamental es el de la sucesión de los Estados. Al constituirse como Estados las antiguas colonias y territorios en fideicomiso, se plantean inmensos problemas. Los cuatro temas son todos de importancia general, no son objeto de divergencias de opinión insuperables y las prácticas respectivas están suficientemente establecidas. Es probable que estos cuatro temas den a la Comisión bastante trabajo para llenar el próximo quinquenio. Sin embargo, ello no debe impedir a la Comisión comenzar la codificación de otras materias propuestas por la Asamblea General en caso de disponer del tiempo necesario.

45. El Sr. AMADO dice que su experiencia personal como representante de su país en las Naciones Unidas, y luego como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, le ha llevado a la conclusión de que sólo puede tomarse una actitud con respecto a la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General. La Sociedad de las Naciones se basó en los trabajos del Instituto de Derecho Internacional para hacer una lista de temas apropiados para la codificación; es evidente que en todo momento la labor de codificación del derecho internacional debe ser confiada a especialistas, a juristas expertos que tengan una gran competencia para decidir que tema ha de incluirse en las convenciones multilaterales que han de convertirse en el derecho de los Estados. El Instituto de Derecho Internacional propuso diversos temas a las Conferencias de La Haya de 1889, de 1907, entre los cuales la Sociedad de las Naciones eligió algunos. Es, sin duda, difícil para los políticos que concurren a los períodos de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional comprender en qué consiste el trabajo de la Comisión. Para lograr resultados positivos, es necesario avanzar lentamente. Por ejemplo, la gran cantidad de trabajo que se invirtió en el proyecto de la Comisión sobre el derecho del mar no hubiera podido condensarse en un debate relativamente breve. No se puede aceptar esa manera fácil con que se toma la labor de codificación, que solamente puede realizarse con lentitud. En el grado de civilización a que ha llegado el mundo, es mucho más importante aún que juristas experimentados provean a los Estados de finos instrumentos jurídicos. Espera, pues, que se permitirá a la Comisión continuar su trabajo en temas tales como la responsabilidad de los Estados, aunque los proyectos pertinentes lleven tiempo.

46. El Sr. SANDSTRÖM, refiriéndose al segundo párrafo del preámbulo de la resolución de la Asamblea General, pregunta si hay algunas ramas del derecho internacional y, en caso afirmativo, cuáles, que fortalezcan la paz internacional, fomenten las relaciones de amistad y de cooperación entre las naciones, solucionen las controversias por medios pacíficos, y adelanten el progreso económico y social del mundo entero.

47. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, en contestación al orador anterior, dice que puede enumerar los temas, aunque dicha lista no es completa. Estos temas incluyen: derecho de asilo; responsabilidad del

Estado; jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia; principios y prácticas que rigen el registro de los tratados; métodos y procedimientos empleados por la Asamblea General; definición de la agresión; cuestiones jurídicas vinculadas a la coexistencia pacífica de los Estados; problemas jurídicos que crea el desarme; problemas jurídicos que crea la abolición definitiva del colonialismo; cuestión de la neutralidad; sucesión de los Estados; uso del espacio ultraterrestre; teoría de las fuentes del derecho internacional; derecho de todos los pueblos a explotar sus recursos nacionales; violación de la soberanía nacional; y aspectos internacionales de la reforma agraria.

48. Señala el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, en virtud del cual se invita a los Estados miembros a presentar al Secretario General, antes del 1.º de julio de 1961, las opiniones y sugerencias que deseen exponer sobre el particular. Ha averiguado en la Sede de las Naciones Unidas si se ha recibido algún comentario a este respecto, pero se le informó que, hasta el 20 de junio de 1961, ningún gobierno había presentado opiniones o sugerencias.

49. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que, con arreglo a la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, sólo corresponde a los gobiernos presentar opiniones o sugerencias sobre la futura labor de la Comisión para que se discutan en la Sexta Comisión de la Asamblea General, en el decimosexto período de sesiones. No se ha pedido a la Comisión que haga observaciones, pero desea aprovechar la oportunidad ofrecida por el Presidente para hacer algunos comentarios sobre los debates de la Sexta Comisión durante el decimoquinto período de sesiones.

50. No sólo no pueden hacerse objeciones a la resolución 1505 (XV), sino que llena una necesidad cada vez mayor, como la demuestran sus referencias a las muchas nuevas tendencias en el campo de las relaciones internacionales, que dejan sentir sus efectos en el desarrollo y en la evolución reciente del derecho internacional. Lo único sorprendente es que estas nuevas tendencias no se hayan advertido mucho antes. Muy poco después de la segunda guerra mundial, los tratadistas, y aun los representantes de los gobiernos, señalaron cada vez con mayor urgencia la necesidad de un nuevo examen y de una revisión del derecho internacional en vista de los cambios profundos ocurridos en la vida interna de los Estados y en sus relaciones internacionales. En consecuencia, la resolución de la Asamblea sólo es un corolario de estas opiniones individuales.

51. Es por tanto muy de lamentarse que la resolución haya estado tan estrechamente vinculada a una de las campañas de propaganda más agresivas y demagógicas de la historia de las Naciones Unidas. Es por demás evidente para cualquiera que haya oído los debates de la Sexta Comisión, o haya leído las actas resumidas y el informe de la Comisión presentado en sesión plenaria, que un grupo de países que nunca se había interesado por el desarrollo y la codificación del derecho internacional, sino que había venido oponiéndose a ellos, trató repentinamente de convertirse en adalid del progreso

del derecho internacional y en defensor de sus principios. Fue el mismo grupo de países que repetidas veces y con insistencia ha subordinado y subordina la validez del derecho internacional al principio de la soberanía nacional y se opuso y continúa oponiéndose al arbitraje obligatorio.

52. Aunque no entrará en detalles, desea plantear la cuestión de los ataques injustos, cuando no del todo infundados, contra la Secretaría, el Relator Especial y aun la propia Comisión, respecto del tema de la responsabilidad del Estado.

53. La cuestión se planteó con pretexto de la invitación extendida a la *Harvard Law School* para que colaborase en el trabajo de la Comisión en esta materia. A ese respecto, se felicita de que se haya invitado una vez más al profesor Sohn para informar sobre la labor emprendida por la *Harvard Law School* a los efectos de colaborar con la Comisión. Es igualmente satisfactorio saber que se hacen esfuerzos similares en otras partes del mundo, y tiene la certeza de que la Comisión estimará mucho estos esfuerzos dondequiera que se realicen, y que en lo futuro ninguna delegación o grupo de delegaciones se opondrá a ellos en la Sexta Comisión.

54. La Secretaría pudo demostrar plenamente que la colaboración con la *Harvard Law School* no era incompatible con las disposiciones pertinentes del estatuto de la Comisión y, mucho menos, con el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas. Debe observarse, sin embargo, que esa colaboración se decidió en 1955 y que se anunció entonces, y que durante seis años, que él recuerde, nadie impugnó su validez.

55. Los cinco informes del Relator Especial sobre el tema de la responsabilidad del Estado (A/CN.4/96, 106, 111, 119, 125), fueron ampliamente distribuidos, pero sólo atendieron a ellos dichas delegaciones en el otoño de 1960. Sin embargo, dichas delegaciones no sólo criticaron a la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas por su tardanza en presentar cuestiones importantes a la Sexta Comisión, por haber violado el principio de la distribución geográfica en la contratación de personal, y por su invitación a la *Harvard Law School*, sino que también criticaron severamente el método empleado en la preparación de dichos informes y hasta su propio fondo. El hecho de que el Relator Especial visitara la *Harvard Law School* y colaborara asimismo con la Oficina Jurídica de la Unión Panamericana fue objeto de censura, y no se insinuó sino que se declaró abiertamente en la Sexta Comisión de la Asamblea General que la colaboración con la *Harvard Law School* había consistido en una «consulta», y que el proyecto de Harvard exponía opiniones «reaccionarias» (657.<sup>a</sup> sesión, párr. 27).

56. Como Relator Especial interesado, le parece innecesario contestar a estas críticas. Es bien sabido que hay países y universidades donde la labor intelectual la dirigen las autoridades, y otros en que reina una libertad absoluta de investigación y expresión. Es difícil comprender qué objeción puede hacerse a que, para preparar sus informes, el Relator Especial haya elegido un lugar en el que puede gozar de la máxima libertad intelectual. Tampoco vale la pena de entrar a discutir las crí-

ticas al fondo de los informes, pero sí puede mencionarse que a veces son tan infundadas que realmente puede dudarse de que los críticos hayan leído esos documentos.

57. También se utilizó el tema de la responsabilidad del Estado como un argumento para criticar a la Comisión de Derecho Internacional. También se hicieron en ese caso críticas infundadas, como la de que únicamente se había estudiado un aspecto del tema —la responsabilidad por los daños causados a los extranjeros— y que se había hecho caso omiso de otros aspectos, como la responsabilidad por la violación de la soberanía territorial, las actividades subversivas y el espionaje, etc.

58. El PRESIDENTE hace notar que la Comisión no examina el trabajo de la Sexta Comisión, sino la futura codificación del derecho internacional y pide al Sr. García Amador que se mantenga dentro de los límites de la materia que se está examinando.

59. El Sr. GARCÍA AMADOR contesta que justamente se refiere ahora a ese punto. Es lamentable que ningún miembro de la Sexta Comisión haya explicado las razones que tiene la Comisión para limitar por el momento el alcance de la codificación de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, no hubiera sido tan fácil contestar otra crítica que se hizo durante los debates, es decir, que se ha adelantado muy poco en esa codificación. En su resolución 799 (VIII) de 1953, la Asamblea pidió a la Comisión que emprendiera la codificación tan pronto como lo considerase oportuno. Dos años más tarde, la Comisión eligió el Relator Especial, quien presentó su primer informe en 1956, cuando el programa de la Comisión se había aligerado mucho por haber terminado el proyecto sobre el derecho del mar. Desde entonces, la Asamblea sólo ha pedido concretamente que se codifiquen dos temas de su programa: las inmunidades diplomáticas y la responsabilidad del Estado, excepción hecha de la revisión del proyecto sobre el procedimiento arbitral. Durante esos seis años muchas delegaciones han destacado repetidas veces la importancia de impulsar la codificación de la responsabilidad del Estado, y recientemente lo ha hecho la Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (Naciones Unidas). ¿Cómo es posible entonces que la Comisión, que ha realizado una labor tan fructífera en los primeros seis años, haya aplazado continuamente el estudio y la codificación del tema de la responsabilidad del Estado? Espera que la Comisión se decida a emprender, en sus próximos periodos de sesiones, el examen de un tema de importancia tan vital para las relaciones entre los Estados, y entre éstos y las personas privadas de nacionalidad extranjera, materia en la que se están produciendo cambios tan profundos e interesantes.

60. Como miembro de la Comisión, le ha sorprendido observar que en la resolución destinada a fomentar la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, la Asamblea haya pasado completamente por alto a la Comisión y a las disposiciones de su estatuto. Las actas de la Sexta Comisión demuestran que el problema fue debidamente planteado por ciertas delegaciones, pero desgraciadamente parece haber preva-

lecido la opinión de que el trabajo debe confiarse a los gobiernos y a los órganos políticos tales como la Sexta Comisión. Es aún más lamentable que quien ostentaba la representación de la Comisión de Derecho Internacional haya permanecido totalmente silencioso durante los debates tanto sobre esta cuestión como sobre otras que también interesaban al prestigio de la Comisión. Una razón de su silencio puede haber sido que algunas delegaciones insistieron en que se estableciera un comité especial de representantes de los gobiernos para hacerse cargo de la labor preparatoria del plan previsto en la resolución 1505 (XV) (véase: pasajes del informe de la Sexta Comisión, citados en A/CN.4/138). Sea como fuere, sería deseable que en lo futuro los miembros de la Comisión que la representen en la Asamblea den más importancia a las disposiciones de su estatuto, como se hizo siempre en lo pasado, y que pongan todo lo que esté de su parte para asegurar que no se menoscabe en modo alguno su prestigio.

61. El Sr. FRANÇOIS apoya las opiniones expresadas por el Sr. Verdross y el Sr. Amado y está de acuerdo con los cuatro criterios propuestos por el Sr. Verdross como base para elegir los temas de la Comisión. Añadiría, sin embargo, un quinto criterio y es que los temas no sean demasiado amplios ni demasiado complicados. Puede decirse que la Comisión ha tenido éxito en su trabajo sobre los tres temas del derecho del mar, las relaciones diplomáticas y las relaciones e inmunidades consulares. La razón de ese éxito es que estos temas eran hasta cierto punto de un alcance limitado. Aun el tema del derecho del mar, a pesar de ser vasto, fue restringido merced al método empleado por la Comisión, la cual completó su trabajo sobre el tema dentro del plazo de cinco años, duración del mandato de sus miembros. Debe recordarse que se ha dado a los gobiernos dos años para presentar sus observaciones; lo que dejó a la Comisión un plazo relativamente breve para volver a examinar sus proyectos en vista de esas observaciones. Para corregir esa situación podría prolongarse el mandato de sus miembros, pero no es éste el momento de hacer sugerencias en ese sentido. Temas de tan vasto alcance como la responsabilidad del Estado y el derecho de los tratados no pueden examinarse en cinco años si los períodos de sesiones de la Comisión sólo duran diez semanas. La *Harvard Law School*, que prepara desde hace varios años un proyecto sobre la responsabilidad del Estado, está en una situación mucho más favorable para tratar ese asunto, por haber dedicado más tiempo a su estudio. En consecuencia, si no se modifica la organización del trabajo de la Comisión, no puede esperarse que discuta temas tan vastos en forma exhaustiva; sus deliberaciones serán demasiado apresuradas o se prolongarán más allá de los cinco años que dura el mandato de sus miembros, y en ese caso se producirán nuevas dificultades con los cambios en su composición y el cambio de relatores especiales. No negará la creciente importancia de un estudio hecho por la Comisión de un amplio tema de derecho internacional como es el de la responsabilidad del Estado o el del derecho de los tratados y pero mientras no se modifique la organización de la Comisión es prácticamente imposible que pueda hacer

algo más que examinar algunos aspectos de esas cuestiones.

62. El Sr. ERIM, al comentar la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, hace notar que se refiere a una nueva necesidad de tener en cuenta ciertos temas de alcance extraordinariamente vasto y relativos a cuestiones como el fortalecimiento de la paz internacional, el desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones, la solución de las controversias por medios pacíficos y el adelanto del progreso económico y social del mundo entero. Parecería que la necesidad de conceder la prioridad a determinados temas ha surgido hace poco más de un año, pues en sus últimas normas directivas a la Comisión, la Asamblea General le pidió que únicamente incluyera en su programa el derecho de asilo y la cuestión del régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las bahías históricas (resoluciones 1400 (XIV) y 1453 (XIV) de la Asamblea General). Mientras que en 1959 la Asamblea General se limitó al programa que incluía las relaciones e inmunidades consulares, la responsabilidad del Estado, el derecho de los tratados, junto con el derecho de asilo y el régimen de las aguas históricas, ahora, al parecer, desea revisar ese programa teniendo en cuenta ciertas nuevas tendencias. Por otra parte, el Secretario acaba de decir a la Comisión que aún no se han recibido opiniones o sugerencias de los Estados Miembros en respuesta al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 1505 (XV). La Comisión se encuentra pues sin saber qué hacer, pues se le pide tener en cuenta las nuevas tendencias y que dé prioridad a nuevos temas, sin haber recibido ninguna norma directiva precisa de la Asamblea General; esa orientación precisa quizá puedan proporcionarla las observaciones de los gobiernos. Por su parte, él no ha observado en las relaciones internacionales ninguna nueva tendencia de una intensidad tal en la esfera jurídica que haya alcanzado el estadio de la codificación. Por el momento no existe ningún tema que tenga un grado de prioridad que pueda motivar que la Comisión aplase para prestarle atención el estudio de los temas que le han sido ya confiados. Un examen de la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, sin embargo, le ha hecho pensar que las finalidades en ella perseguidas podrían lograrse mediante un estudio completo de la jurisdicción internacional obligatoria y de la renuncia progresiva a lo que se llama «competencia exclusiva» de los Estados. Es sumamente improbable, no obstante, que los Estados estén dispuestos a aceptar una sugerencia de que la Comisión examine ese tema. Por lo tanto, a la Comisión le resultará difícil encontrar un tema para un proyecto que sirva para promover las finalidades expuestas en la resolución de la Asamblea General. Sólo puede esperar las observaciones o sugerencias de los gobiernos, especialmente las de los gobiernos de los Estados que patrocinaron la resolución en la Asamblea General. A continuación, la Comisión podrá volver a examinar con provecho la cuestión y estará en condiciones de formular sugerencias.

63. El PRESIDENTE señala que no se espera que la Comisión formule recomendación o tome decisión alguna a este respecto. Se inició el debate únicamente

porque algunos miembros de la Comisión desearon dar a conocer sus opiniones sobre la labor futura en materia de codificación y del desarrollo progresivo del derecho internacional.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

## 615.ª SESIÓN

*Miércoles 21 de junio de 1961, a las 10.10 horas*

*Presidente:* Sr. Grigory I. TUNKIN

### **Preparación del plan de trabajo de la Comisión** (A/CN.4/138) (continuación)

[Tema 6 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar examinando el tema 6 del programa, con referencia especial a la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General.

2. El Sr. EDMONDS dice que la Comisión deberá mantener en su programa de trabajo temas como la responsabilidad del Estado y el derecho de los tratados, cuyo estudio ya ha iniciado, como indicó (614.ª sesión, párr. 62) el Sr. Erim. Por otra parte, estima que tiene bastante fundamento el argumento del Sr. François (*Ibid.*, párr. 61) según el cual conviene que la Comisión se ocupe de temas más limitados o que se prolonguen sus períodos de sesiones. No es posible discutir los temas con todo el detenimiento que merecen, porque el Comité de Redacción presenta los proyectos de texto a la Comisión plenaria en una fase ulterior del período de sesiones. Comprende que prolongar los períodos de sesiones de la Comisión originará graves dificultades, pero cree que, si al menos se presentara antes una parte de los proyectos de textos del Comité de Redacción, la Comisión dispondría de más tiempo para estudiarlos y para preparar instrumentos más cuidadosamente meditados.

3. El Sr. YASSEEN manifiesta que, como asistió al debate de la Sexta Comisión sobre el proyecto que después pasó a ser la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, desea aclarar algunos extremos y disipar ciertas dudas. No cree que haya que defender la resolución. La competencia de la Asamblea General por lo que respecta a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional está establecida con claridad en el apartado a) del Artículo 13 de la Carta y la Asamblea no ha renunciado a ella al crear la Comisión de Derecho Internacional, que es uno de sus órganos. Así pues, la Asamblea tiene derecho a proponer temas a la Comisión, como ya ha hecho en varias ocasiones y, sin duda alguna, puede, además, proponerle un programa de trabajo. Ello no menoscaba ni la competencia ni el prestigio de la Comisión. Por otra parte, nadie

pone en duda que la Comisión pueda elegir temas para sus tareas o materias que codificar y ningún delegado ha discutido en la Sexta Comisión esa competencia.

4. El fin perseguido por los patrocinadores de la resolución es que la Asamblea General tome una parte activa en la codificación del derecho internacional y su desarrollo progresivo. Es bien sabido que la Comisión de Derecho Internacional tiene un programa, pero no resulta ciertamente inútil que la Asamblea General haga conocer su opinión sobre la cuestión. Si bien la elección de los temas ofrece un aspecto técnico también posee un aspecto acentuadamente político, que implica la apreciación de consideraciones diferentes. No se ha dicho que la Comisión de Derecho Internacional no pueda llevar a cabo esa apreciación, pero se ha indicado que la Asamblea General y, en especial, la Sexta Comisión, compuesta de juristas que son al mismo tiempo representantes de los Estados, son las más llamadas a proceder a dicha apreciación. En la Sexta Comisión se tiene siempre presente la idea, magníficamente expresada por el Sr. Amado de que el derecho internacional no es obra de profesores, sino de estadistas. Incluso desde el punto de vista de la oportunidad no se puede dudar de la competencia de los delegados juristas de los diferentes Estados para «analizar todo el campo del derecho internacional y hacer las sugerencias pertinentes acerca de la preparación de una nueva lista de materias para su codificación y para el desarrollo progresivo del derecho internacional.»<sup>1</sup>

5. Los debates de la Sexta Comisión sobre la cuestión han sido sumamente útiles y han puesto de manifiesto el gran interés que muchos Estados tienen por el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Quizá convenga subrayar que muchos delegados insistieron en el curso de los debates en que el proyecto de resolución no implicaba la menor crítica hacia la Comisión de Derecho Internacional y en el mismo proyecto se agradecía a la Comisión la labor realizada, cuestión que nadie puso en duda. La resolución resultante de los debates ha establecido un método de trabajo razonable y útil. El último proyecto de resolución fue presentado por 24 Estados<sup>2</sup> y fué objeto de una acogida excepcional por parte de la Sexta Comisión, pues fue aprobado por unanimidad. Ese proyecto se diferencia del primero en la supresión del párrafo relativo a la creación del comité especial, el que por otra parte, según los patrocinadores del proyecto primitivo, no hubiera tenido otra función que la de llevar a cabo estudios preparatorios, para facilitar la tarea de la Asamblea General.

6. Por último, el Sr. Yasseen manifiesta su opinión de que la resolución refleja el grand interés que tienen todos los Estados en promover la causa de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, hecho del que hay que congratularse.

<sup>1</sup> Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto período de sesiones, Suplemento N.º 16 (A/4684), pág. 64.

<sup>2</sup> Afganistán, Argentina, Brasil, Canadá, Ceilán, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Ghana, Indonesia, Irak, Irán, Líbano, Liberia, Marruecos, México, Países Bajos, Pakistán, República Árabe Unida, Tailandia, Túnez, Turquía, Venezuela y Yugoslavia.